

Paulo Peixoto

**Anatomía y percepción de la falta de seguridad urbana
en tres ciudades de dimensión media**

**Oficina do CES n.º 265
Dezembro de 2006**

Paulo Peixoto

Centro de Estudos Sociais e Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra

Anatomía y percepción de la falta de seguridad urbana en tres ciudades de dimensión media*

Resumo: A partir de una investigación que se está realizando sobre tres ciudades portuguesas (Coimbra, Guimarães y Oporto), se analiza la anatomía y la percepción de los nuevos riesgos urbanos que emergen en los centros históricos de estas ciudades.

La expansión de un mercado urbano de ocio y entretenimiento, la dinámica de envejecimiento de la población residente, la aplicación experimental de soluciones políticas y técnicas para encauzar el sentimiento de falta de seguridad, configuran situaciones de *guetización* de los habitantes de los centros históricos que reclaman nuevos modelos de gestión de los riesgos urbanos.

La falta de seguridad como sofisma mediático y político

Este texto presupone que las ciudades se presentan, sobre todo de cara a los políticos y a los medios de comunicación, como un objeto a cuyo alrededor se genera fácilmente un discurso simplista sobre la falta de seguridad. Presuponer esto permite, asimismo, discutir algunas razones que hacen que las ciudades se presenten y se vivan como si atravesasen una crisis profunda. Analizar estas razones ayuda a descubrir algunas ideologías que se ocultan tras los discursos que acentúan esta pretendida crisis de las ciudades.

Los riesgos, las amenazas y las violencias que se ciernen sobre el mundo urbano y el hecho de que el término *inseguridad* sea fácilmente comprensible y asimilable propician su instrumentalización con finalidad política. El tema de la falta de seguridad urbana es extraordinariamente útil a los intereses que pretenden ocultar cuestiones embarazosas o difíciles de encauzar políticamente. Hay que reconocer que la representación y el estereotipificación de los problemas de la falta de seguridad urbana se realizan para ocultar realidades más complejas. La pobreza y la exclusión, que la sociedad no deja de producir, están, muchas veces, ausentes en la retórica alusiva a la falta de seguridad.

* Texto elaborado en el ámbito del proyecto de investigación “Dinâmicas de recomposição socioeconómica dos centros históricos: o caso de Coimbra” (POCTI/SOC/60886/2004), financiado por la Fundação para a Ciência e a Tecnologia y realizado por el Centro de Estudos Sociais.

Los índices de violencia urbana favorecen, por otra parte, que se instrumentalice para una finalidad mediática, ya que, al estar tan exacerbada, la cuestión de la falta de seguridad nutre un sentimiento de nostalgia en relación a “aquellos buenos tiempos”. La mediatización de la cuestión de la falta de seguridad no deja de estar frecuentemente marcada por la comparación entre la sociedad actual y una sociedad anterior, pacífica y civilizada por valores morales sólidos. En este sentido, la mediatización de la falta de seguridad contribuye recurrentemente a idealizar las relaciones sociales y de ciudadanía.

Como sofisma político y mediático, la inseguridad es un término que adquiere un carácter fluido. Nutriéndose de ese carácter, y reproduciéndolo, los discursos políticos y mediáticos explotan y recodifican el término para alcanzar sus propios fines (Body-Gendrot, 2001). La falta de seguridad se erige en elemento central de una nueva sintaxis sobre el paisaje urbano. Las cuestiones relacionadas con la falta de seguridad parecen estar cada vez más encuadradas en argumentos y razonamientos concebidos con el objeto de producir una pura ilusión de la verdad. Se trata, en muchos casos, de presentar la falta de seguridad como un fenómeno reciente y amenazador pero que, no obstante, puede ser dominado por políticos competentes. En el juego retórico, aunque las explicaciones políticas simulen ser coherentes con las reglas de la lógica, éstas dejan transparentar cierta estructura interna que es inconsistente, incorrecta e incluso deliberadamente engañosa. Esa verdad oculta permite defender, como hacemos en este texto, que la cuestión de la falta de seguridad funciona recurrentemente como coartada para una acción política que confunde causas y efectos. Son muchos los políticos que sucumben ante la tentación de combatir la falta de seguridad. Sin embargo, deliberadamente o no, tienden a interpretarla como causa y a olvidar que ésta es un efecto de fenómenos políticamente ingratos y de solución incierta.

En la forma que asume en los medios de comunicación, la falta de seguridad propicia una argumentación que aparenta verosimilitud o veracidad, pero que está entrelazada, a veces involuntariamente, con incorrecciones lógicas. Como sofisma mediático, la cuestión de la falta de seguridad aparece tratada muchas veces como una miscelánea indiferenciada, cuando tendría que ser abordada como un conjunto de situaciones de naturaleza y de gravedad dispares. Añádase que los protocolos de los medios de comunicación refuerzan sentimientos de pánico y difunden etiquetas estigmatizantes que producen efectos de espiral de violencia. Las contradicciones lógicas del sofisma mediático se ponen de manifiesto especialmente al nivel de la exacerbación del sentimiento de inseguridad. Éste, por su parte, se evidencia muy claramente en los modos de ver y de vivir la ciudad (Body-Gendrot y Le Guennec, 1998).

Las cuestiones que acabamos de identificar se abordan, en este texto, a partir del análisis de tres casos que ilustran situaciones de otras tantas ciudades portuguesas. Oporto, con una población de alrededor de 260 mil habitantes; Guimarães, que se acerca a los 160 mil, y Coimbra, que tiene unos 150 mil residentes. A partir de Oporto analizamos un caso revelador de cómo los políticos sucumben a la tentación de echar mano de la falta de seguridad, sobre todo si pueden tener como blanco poblaciones fácilmente estigmatizables. El caso de Guimarães, aunque acentúe el ímpetu político de los gobernantes locales para solucionar problemas de falta de seguridad, motivado por reivindicaciones de conciudadanos encolerizados, adquiere contornos diferentes debido a la tentativa de adopción de soluciones experimentales que pretenden consignar nuevos modelos para tratar la falta de seguridad. Coimbra, en donde se ha planteado ese mismo mecanismo técnico políticamente ideado para Guimarães, permite ejemplificar una situación de cierta *guetización* acompañada de la degradación del habitat, aunque esto no implique, al contrario de lo que quiere hacer creer la retórica mediática, que la falta de seguridad imposibilite una vida comunitaria.

Oporto feliz

A mediados de 2002, Carlos Mota Cardoso, Presidente de la Fundação para o Desenvolvimento Social do Porto (Fundación para el Desarrollo Social de Oporto), diseñó un plan estratégico de combate a la exclusión social. Dentro de este plan destacaba en particular un proyecto que se llamaría “Oporto feliz”. Los objetivos de este “Oporto feliz” incluían retirar de las calle de la ciudad de Oporto a los aparcacoches, reinsertándolos socialmente a través de su inclusión en actividades ocupacionales comunitarias o a través de la concesión de un empleo. Se trata de un proyecto que asume claramente el objetivo de rescatar toxicómanos y que establece una relación inequívoca entre la condición de aparcacoches y la de consumidor de drogas. En este sentido, la carta abierta del Alcalde a los ciudadanos, difundida en 2004, época de un llamamiento público que pretendía movilizar a los ciudadanos para garantizar el éxito del proyecto, no ofrece ninguna duda (Câmara Municipal do Porto, 2004).

La droga es uno de los mayores problemas de nuestra sociedad y sabemos que, por culpa suya, son muchos los portuenses que sufren.

Por tener conciencia de ello, la droga constituye para nosotros una prioridad política y, también por ello, hemos creado el Proyecto Oporto Feliz; un programa pionero en Portugal.

El proyecto es bien visible en el campo de la integración de los ciudadanos popularmente llamados “aparcas”.

Queremos ayudar a quienes nos necesitan más, queremos hacer de Oporto una ciudad más segura y, para ello, nos sentimos en la obligación de luchar contra el consumo y el tráfico de droga.

Pero para que el éxito sea completo, los aparcacoches que siguen ejerciendo esta actividad, siguen necesitando nuestra ayuda, especialmente la suya.

Antes de dar la moneda habitual, piense que es precisamente esa moneda lo que va a contribuir a perpetuar el problema de quienes la reciben. Sobre todo porque ésta irá a parar al bolsillo de quienes hacen un negocio inhumano con la desgracia ajena.

Dar una moneda puede ayudar a disminuir nuestra incomodidad interior, pero ayuda, indiscutiblemente, a eternizar el problema en nuestra ciudad.

Por eso, por mucho que le cueste, siga sin dar. Nosotros seguimos dando por Vd.

El camino justo y solidario es el que lleva a la inclusión ... ¡a la libertad! ...

EN NOMBRE DE NUESTRA CIUDAD, MUCHAS GRACIAS.

La depuración del paisaje urbano, a través de la eliminación de uno de los elementos más molestos para el poder político, queda justificada, perentoriamente, por razones de seguridad. Dicho al contrario, el imperativo de la seguridad lleva fácilmente a un ejercicio de estigmatización. La etiqueta y el estigma de la droga apriorísticamente asociados a los aparcacoches, aunque no todos consuman drogas,¹ legitiman un programa político higienizador que se autojustifica con objetivos socialmente aceptables y muy valorados y también políticamente irreprochable para los ciudadanos preocupados. La evidencia de una acción higienizadora les parece a los responsables municipales incuestionable y se manifiesta claramente en las declaraciones del mentor del proyecto, pronunciadas con motivo de la realización del balance de su primer año de funcionamiento. En declaraciones al *Jornal de Notícias* (Norte, 2002) se refirió a los aparcacoches incluidos en el proyecto como si casi todos fuesen “casos perdidos”, consumidores de drogas desde hacía años, que aparcaban coches para financiar su drogadicción y que dormían en cualquier sitio. A estas características estigmatizantes se añade la información agravante de que muchos de los incluidos en “Oporto feliz” los tiene fichados la policía por vagabundeo o por haber cometido pequeños delitos. Y, *last but not least*, la mayoría es portadora de enfermedades infecciosas, lo que constituye un problema de salud pública en un “cuadro social preocupante”. Por todo ello se concluye fácilmente que “a nadie le gusten los aparcacoches. Todos prefieren ignorarlos y darles la monedita de rigor por un servicio que nadie les pide y que, menos aún, les agradece. Sin embargo, es imposible no darse cuenta de cómo proliferan, por toda la ciudad, e incluso en los alrededores, estos individuos delgados, barbudos, de edad indefinible y con rostros marcados por las drogas”.

¹ José Machado Pais (2001), en el estudio que hizo en Lisboa sobre los aparcacoches, revela que el universo heterogéneo de los aparcacoches no es reductible a los consumidores de drogas, aunque la mayoría lo sean, y concluye que el sentido común y los media legitiman la asociación directa y simple entre el consumo de drogas ilegales y la delincuencia.

Así, aunque sea “verdad que son ellos los que se han excluido (...), todos tenemos el deber de volver a incluirlos” – afirmaba Carlos Mota Cardoso al *Jornal de Notícias* (Norte, 2002). El desarrollo del proceso empieza, por ello, identificando a los aparcacoches. Después exige convencer a sus destinatarios a seguir un programa de desintoxicación, trabajo del que es responsable la “Unidad de Intervención Sociosanitaria”. Luego viene una fase de tratamiento ambulatorio. Y a ésta le sucede otra de formación profesional. Y, finalmente, aparece la inserción profesional. Para el primer año de funcionamiento del proyecto la institución que lo organiza hizo un presupuesto de 200 mil euros, lo que supone una inversión irrisoria dados los beneficios sociales que aportaría su aplicación. También en el aspecto presupuestario, aunque posteriormente el presupuesto fuera aumentado hasta alcanzar los 3 millones de euros en 2004, la justificación del proyecto quedaba debidamente afianzada.

El balance hecho tras el primer medio año de funcionamiento de la iniciativa, procurando poner de manifiesto su enorme éxito, se aprovechó para recuperar una idea originariamente presente en la concepción del proyecto y para conferirle una base social de apoyo ampliada a toda la ciudad. “Oporto feliz: un designio”, tal y como fue proyectado, ofreció tratamiento de desintoxicación a 200 aparcacoches en los primeros seis meses de funcionamiento. En el balance de ese medio año, la prensa y la ciudad recibieron la noticia de que dos decenas estaban preparados para ser insertados profesionalmente, desempeñando tareas de reconocido valor para la sociedad, principalmente tapar baches de la vía pública y limpiar las playas de la ciudad. El elemento perturbador del paisaje urbano regresa a ese paisaje para hacerlo placentero y *feliz*. En ceremonia pública de balance, el Alcalde llegaría a decir que los resultados de “Oporto feliz” se encuentran “a la vista de todos y se reflejan en la calidad de vida de los recuperados y de sus familias, pero también en nuestra calidad de vida global” (Alves, 2003). Y aprovechó para recordar, – no fuera a olvidarse el gran designio – que el esfuerzo iniciado para luchar contra la drogadicción es “un elemento decisivo en materia de política de seguridad” (*Idem*, 2003).

El proyecto “Oporto feliz” fue concebido para ser el designio de una ciudad. No es sólo un proyecto de combate a la exclusión social, como, *grosso modo*, ha sido muchas veces presentado. Es también un proyecto que se basa en la idea de que la ciudad tiene que empeñarse para conseguir sus deseos, sobre todo con los que tienen que ver con la seguridad y con el orden. Por eso, sólo un mes después del comienzo, en una ceremonia presidida por el Alcalde y por el más ilustre banquero de la ciudad, se creó la cuenta bancaria “Oporto feliz”.

Se invitaba también a los portuenses a asociarse financieramente con el objeto de garantizar el éxito de la iniciativa. Después de esta acción hubo otras que procuraban dejar claro que los designios de “Oporto feliz” le corresponden también a la ambición colectiva de una ciudad. En noviembre de 2002, con la participación de unos 200 comensales, se realizó “una noche de gala por los aparcacoches” destinada a obtener fondos para el proyecto (Silva, 2002). Y al celebrarse el primer aniversario del proyecto se adoptó una nueva iniciativa destinada a reforzar la participación de la población y a garantizar su cooperación efectiva en los objetivos de “Oporto feliz”. Así, bajo el lema “Contribuya. No dé nada. Nosotros damos por usted”, el Ayuntamiento inició, con la participación de sus más altos representantes, acciones de calle destinadas a convencer a los automovilistas a no dar monedas a los aparcacoches.

Los folletos distribuidos a los automovilistas son el índice más visible, pasado el primer año de la creación del proyecto, de que era necesaria una campaña de sensibilización a gran escala para garantizar su éxito. El poder político menospreció desde el principio ese complejo mundo de los aparcacoches que José Machado Pais retrata (2001). La relación proveedor-cliente que cultivan los aparcacoches con muchos usuarios del servicio que ofrecen, la concepción de su actividad como una profesión que posee una ética propia, los ingresos obtenidos por el ejercicio de su actividad, el valor dado a la flexibilidad del horario laboral y a la independencia en relación a jerarquías, unidos a los temores de los automovilistas de que les dañaran el coche por no dar la moneda, son algunos de los factores que delimitaron las condiciones de éxito del proyecto.²

Conocidos los primeros reveses – había aparcacoches que rehuían a los asistentes sociales de la Fundación para el Desarrollo Social de Oporto y conductores que no acataban la

² Las acciones de experimentación social tienden a sufrir un efecto de venganza de la realidad existente sobre la realidad deseada. Como ejemplo, referimos un caso ejemplar en este campo ocurrido en Holanda. En 1997, la Ministra de Sanidad holandesa quiso comenzar un programa que midiese los efectos de administrar heroína a drogadictos incurables. Pretendía saber, concretamente, hasta qué punto se debían a la misma heroína y a su alto precio en el mercado las condiciones deficientes de existencia y los comportamientos desviados de los adictos. Defendió en el parlamento que, por motivos estadísticos, serían necesarios para su programa por lo menos 750 adictos a la heroína. Además, explicó que el proyecto debía respetar la metodología experimental en que los grupos experimentales son comparados con otros grupos de control. Para poder garantizar esta comparatividad, los 750 participantes debían ser escogidos de manera aleatoria para formar parte del grupo experimental, que recibiría heroína gratuita, o del grupo de control, que recibiría metadona. Durante medio año los grupos serían monitorizados para poder averiguar variaciones en términos de salud y de comportamiento. Cuando la Ministra consiguió imponer políticamente su experiencia ocurrió algo inesperado. En vez de disponerse a ser observados a cambio de heroína gratuita (como esperaba la Ministra), más que asaltar los puestos de distribución de heroína (como los conservadores habían previsto), gran parte de los drogadictos abandonó el programa en una fase inicial, porque, como explicaron, “la heroína no sabía bien”. El fracaso de esta experiencia revela las fragilidades y las arbitrariedades del argumento principal asociado a la experimentación social, que se basa en la suposición de que una sociedad regulada es el mejor de los mundos para toda la gente y que las poblaciones fácilmente estigmatizables embarcan fácilmente en los devaneos políticos.

petición de no dar monedas – el poder político adoptó un discurso de radicalización de los argumentos de seguridad. Paulo Morais, Teniente de Alcalde de Oporto, declaró en un debate público, en febrero de 2003, que “ la lucha contra la exclusión debe ser considerada una guerra. Hay muchos intereses, grupos de presión y corporaciones que se nutren de la exclusión”. Añadiendo que la erradicación del fenómeno de los aparcacoches es también una guerra contra “las organizaciones mafiosas del tráfico de droga”. Terminando con el argumento de que «en la guerrilla contra estas corporaciones tenemos que ser rápidos. Había furgonetas para dejar a los aparcacoches en el lugar (Plaza de Francisco Sá Carneiro). Las mafias no podían apoderarse del terreno y que, en este sentido, “Oporto feliz” había valido la pena porque había alterado el paradigma social de la ciudad» (Hugo Silva, 2003a). Esta radicalización del discurso político encontró enseguida apoyo en los análisis populares. Oído por el *Jornal de Notícias*, en noviembre de 2003, un automovilista de Oporto confesaba que, a pesar de estar de acuerdo con el Alcalde en el sentido de que era necesario perder la costumbre de dar la moneda, no dejaría de hacerlo para no sufrir represalias, adelantando a continuación la solución para el problema; “No damos las monedas y pagamos los perjuicios. Con más vigilancia policial es como se solucionaba esta situación, pero vemos a la policía municipal allí al lado de ellos y no hacen nada” (Alves, 2003b).

De la radicalización del discurso a la adopción de medidas enérgicas no hubo más que un pequeño paso. El poder político municipal ancló la continuidad del proyecto en la acción de la Policía Nacional (Policia de Segurança Pública – PSP). A finales de 2002, las fuerzas del orden habían puesto centenares de multas a aparcacoches, algunos de ellos sin domicilio fijo. No se pagó ninguna multa. Pero la verdadera intención de este comienzo fue usar el poder disuasorio de la intervención de la Policía Nacional. La entrada en escena de la Policía Municipal obedecía a la adopción de medidas de persuasión más eficaces. En octubre de 2003, algunos agentes que habían salido de la Policía Nacional para integrarse en la Municipal denunciaban presiones políticas para retener a los aparcacoches durante varias horas en la comisaría para así poder integrarlos en el “Oporto feliz” (Norte, 2003). Estas denuncias se sumaban a otras de octubre de 2002, cuando el Alcalde cesó al jefe de la Policía Municipal, alegadamente porque éste se había negado a cumplir las directrices municipales que aconsejaban la retención de los infractores durante varias horas en las instalaciones policiales (Meireles y Norte, 2004). Los métodos en que se basaba esta intervención paisajística, para difundir la imagen de que la ciudad se encontraba limpia de aparcacoches,

provocaron que el principal partido de la oposición solicitara que el Fiscal General del Estado dictaminara sobre la legalidad de los métodos utilizados.

La politización de este proyecto se acentuó cuando, en 2004, el Fiscal General del Estado se pronunció considerando que la detención de los aparcacoches, a efectos de identificación, era ilegal e inconstitucional. El poder Municipal, que había incentivado la retención de los aparcacoches en las comisarías para identificación e incluso su detención por el delito de desobediencia, en los casos de reincidencia en esa actividad, tuvo que hacer frente a la contestación legal por los métodos aplicados para promocionar la integración social y la seguridad. El Fiscal General del Estado, subrayando los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos consagrados en la Constitución, concluyó que el delito de desobediencia sólo existe cuando la exigencia de identificación se efectúa de manera legítima, lo que no ocurría en este caso concreto (Mota y Norte, 2004). Esta opinión intensificó la polémica sobre un programa controvertido, con el principal partido de la oposición cuestionando su legalidad y las fuerzas policiales sin dar muestras de abandonar la aplicación de los métodos sugeridos por el poder municipal.

Esta politización tiene lugar en un contexto en que el éxito del proyecto, independientemente de su utilidad y legitimidad social, se estaba cuestionando. Desde que fue lanzado, se fue evaluando el “Oporto feliz” con balances contradictorios hechos por sus responsables y la constante necesidad de legitimación del proyecto, dada la contienda en que se vio inmerso, no contribuyó nada a ayudar a evaluar si cumplió los objetivos que se había propuesto. En noviembre de 2002, el Alcalde afirmó que eran 140 los aparcacoches integrados en el programa de recuperación (Silva, 2002), en un momento en que habían sido identificados por los técnicos de la Fundación para el Desarrollo Social de Oporto unos 500 y contactados 317 (82 de los cuales recibían acciones de formación). En diciembre de 2003, ese mismo responsable político informó que el total de los aparcacoches de Oporto se elevaba a 400, y no a 700, como se había calculado al comienzo del proyecto: 200 habían sido, entonces, orientados hacia acciones de tratamiento y 100 habían manifestado “voluntad de entrar en el programa”. Estos datos le permitieron al alcalde concluir que, a pesar de los 60 resistentes que no se habían integrado en el “Oporto feliz” por “no reunir condiciones psicológicas”, el fenómeno de los aparcacoches estaba erradicado (Luz, 2003).³ No tan erradicado, a pesar de todo, ya que el Ayuntamiento aumentó el presupuesto y lo lanzó a

³ El *Jornal de Notícias* que, durante dos días de diciembre de 2003 hizo una investigación por varios lugares de la ciudad, en la secuencia de las declaraciones públicas del Teniente de Alcalde que insistía en que “ya no había aparcacoches en Oporto”, censó 85 (Luz, Norte y Silva, 2003).

partir de nuevas bases. Concretamente, distribuyendo 4 euros por día a todos los que se integrasen en el proyecto y estableciendo reglas rigurosas de conducta para los participantes.

La desaparición súbita, en este discurso del Alcalde, de por lo menos la mitad de los aparcacoches censados tuvo lugar en un momento en que se planteaba otra cuestión importante de los procesos de adopción de medidas de seguridad.⁴ Nos referimos concretamente a los conocidos efectos laterales de medidas de aumento de seguridad, sobre todo el desplazamiento de la falta de seguridad hacia zonas menos mediáticas y menos frecuentadas por las clases medias urbanas. En marzo de 2003, algunos habitantes de Vila do Conde (pequeña ciudad cercana a Oporto) se quejan de estar hartos de robos sucesivos, supuestamente cometidos por ex-aparcacoches integrados en el “Porto feliz” y desplazados a la Colónia da Árvore (Colonia del Árbol). A pesar de que, según las declaraciones recogidas por Nuno Silva (2003b), la reacción de los residentes se base en prejuicios, ya que los vecinos de la Colonia no tienen razón de queja y ya que tampoco se recibió ninguna denuncia en el puesto de la Guardia Nacional Republicana, es forzoso reconocer que nos encontramos ante una dimensión considerable de los procesos de adopción de medidas de seguridad, sobre todo cuando las pretendidas causas de falta de seguridad han sido desplazadas. Este efecto es tanto más sintomático cuanto que supone, como aquí ocurrió, no sólo la contestación de gente furiosa sino también la de las propias entidades políticas. En este caso, la del Alcalde de Vila do Conde, dispuesto, él también, a tomar medidas para solucionar el problema.

No menos sintomático es el efecto espontáneo de modelación de proyectos de refuerzo de la seguridad. “Porto feliz” no tardó en tenerlos. Y fueron, desde luego, ciudades cercanas a Oporto las que quisieron refutar el modelo. En la ciudad de Aveiro, a comienzos de 2003, el Ayuntamiento no sólo decidió regular la actividad de aparcacoches, sino también, inspirándose en “Oporto feliz”, iniciar un programa para su erradicación. “Actuar para

⁴ En un balance efectuado por el Ayuntamiento de Oporto en julio de 2003, con motivo del primer aniversario del proyecto, el “Oporto feliz” había censado a 752 aparcacoches, 230 de los cuales ya se habían integrado. La mayor parte de éstos se encontraba en tratamiento médico ambulatorio (129) o siguiendo acciones de formación (177), siendo reducido el número de los que habían llegado a la fase de inserción profesional (Hugo Silva, 2003b). Un año después Nuno Silva (2003a) recoge un balance todavía más negativo. De los 1246 contactados, sólo 449 llegaron a integrarse en el “Oporto feliz”, 350 estaban en tratamiento, 80 estaban acogidos en instituciones benéficas y sólo unos 50 llegaron a la fase de inserción profesional. A pesar del limitado éxito, desde las recaídas de los que llegan a la fase de tratamiento hasta los que abandonan el proyecto sin alcanzar esa fase, pasando por situaciones de comportamiento de riesgo y de ilegalidad entre los integrados (como lo prueban las encuestas del Centro de Investigación de los Problemas Sociales, creado para monitorizar el proyecto), las entidades promotoras del proyecto no dejaban de aseverar su incontestable éxito. Lo hacían chocando, como revela Nuno Silva (2003a), con el orgullo que domina las conciencias de las clases medias, siempre dispuestas a solicitar medidas de seguridad. Aportaban, por ello, como ejemplo irrefutable del éxito, el hecho de que “57 usuarios habían pagado impuestos sobre la renta”, en una clara “prueba de reintegración social”.

integrar” recoge la filosofía de “Oporto feliz” a otra escala, ya que aquí el universo de aparcacoches se limitaba a unos 30. Para esta ardua tarea fueron movilizadas 11 instituciones con el objeto de colaborar con el Ayuntamiento, incluyendo a la Policía Nacional y a la Municipal (Costa, 2003). En julio, el Ayuntamiento de la ciudad de Barcelos sigue una línea semejante y en Guimarães desde comienzos de ese año se hicieron sentir exigencias de contestar el “Oporto feliz”. Los dirigentes locales del Partido Popular, sin perder de vista el “Oporto feliz”, propusieron medidas más drásticas, como “el censo de los drogadictos del municipio para que tengan tratamiento un mayor número” (Forte, 2003).

El “Gran Hermano” en los centros históricos

¿Por qué rechazaron los habitantes de Guimarães un sistema de video-vigilancia en el casco histórico si esto en principio les daría más seguridad? Aunque no abordemos aquí los motivos de este rechazo en su totalidad, esta cuestión permite discutir algunas razones sociales y políticas que se esconden detrás de muchas acciones de experimentación técnica aplicadas en los cascos históricos, a través de una variedad de instrumentos y equipamientos específicamente concebidos o adaptados para solucionar problemas que existen allí. En el caso concreto que aquí analizamos se trata de mostrar que el riesgo del sentimiento de inseguridad puede ser aprovechado y estimulado para ejercer formas de control que aumentan de hecho el riesgo de inseguridad. Pero más aún. En situaciones en que no existen ni la falta de seguridad ni el sentimiento de ella, como, *grosso modo*, es el caso del casco histórico de Guimarães,⁵ la tentativa de imposición de un sistema de video-vigilancia revela lo que es una de las características más representativas de las soluciones experimentalistas que invadieron los procesos de gestión de la seguridad: la idea de que una sociedad regulada y formatada es mejor para toda la gente.

En octubre de 1997, una sesión de la Asamblea Municipal de Guimarães terminó bruscamente cuando el Alcalde decidió abandonarla de manera intempestiva y vociferante, argumentando que el sistema de video-vigilancia que el Ayuntamiento pretendía instalar en el casco histórico no afectaba en nada a la privacidad de los ciudadanos. A este argumento, esgrimido por algunos diputados municipales y compartido por varios munícipes, el concejal António Magalhães contraponía la necesidad de adoptar un sistema que permitiese proteger

⁵ En 2000, la Policía Nacional de Guimarães registró 60 robos a personas, 140 robos de coches, 145 robos en coches, 32 robos en residencias y 81 robos en establecimientos comerciales.

los monumentos históricos y los bienes patrimoniales existentes en el centro urbano. No porque existiesen señales evidentes de vandalismo,⁶ sino porque sería conveniente garantizar una protección suplementaria a un patrimonio que quería recibir de la UNESCO el estatuto de patrimonio de la Humanidad, cosa que más tarde realmente sucedería.

En el centro histórico de Guimarães predominan aún los modos tradicionales de gestión de los principales riesgos urbanos, basados en un urbanismo de cercanía, en la vecindad espacial, en el interconocimiento, en cierto espíritu de colectividad y en la existencia de instituciones cercanas capaces de operar en los diferentes dominios en que se manifiestan estos riesgos. Pero el hecho de que el casco histórico esté habitado por individuos de edad avanzada cuestiona los modos tradicionales de gestión de los riesgos urbanos y potencia riesgos específicos de una población con esta peculiaridad. Añádase que el centro histórico de Guimarães, a semejanza de otros, está asistiendo al desarrollo de nuevas dinámicas y sociabilidades. Entre éstas podemos destacar las actividades nocturnas de ocio. Esta *nueva* función de los cascos históricos ha sido recurrentemente señalada como una de las principales responsables del clima de inseguridad. El ruido procedente de cafés, bares y discotecas que invaden los cascos históricos, y que en Guimarães es especialmente intenso en la Plaza de Santiago e inmediaciones, provoca algunos conflictos con los residentes. Los desacatos, el vandalismo, el bandidismo asociados a un supuesto consumo excesivo de alcohol, así como la presencia de traficantes y consumidores de estupefacientes son situaciones que contribuyen, de acuerdo con los análisis de la prensa, a aumentar el sentimiento de inseguridad entre los residentes y que configuran otras tantas situaciones de riesgo. En casos extremos los vecinos dicen que se sienten rehenes en sus propias casas y hablan de un clima de terror.

No sorprende, por ello, que en espacios laberínticos y densos como son los centros históricos, incluyendo el de Guimarães, y en donde nacen nuevos sentimientos de riesgo, la video-vigilancia se presente como una solución que para muchos es obvia, actuando como equivalente funcional del *panopticum* de Bentham. La rigidez del espacio es así evitada por la plasticidad de una tecnología que permite controlar sin ser vista (Foucault, 1977). Menos

⁶ Aunque la presencia y la concentración de consumidores de drogas en la Plaza de Santiago, junto a la Plaza de Oliveira, sea bastante regular, esta presencia no ha redundado en ningún tipo de agresiones al patrimonio ni en otras acciones de vandalismo. En este sentido, el Ayuntamiento optó por poner un vigilante en aquel sitio, en una evidente operación de higienización tan característica de las acciones experimentalistas. Estas operaciones de higienización asumen, a veces, tonos voluntaristas y contraproducentes. En Guimarães, por iniciativa de uno de estos vigilantes, se recurrió a derramar lejía (un producto que simboliza la pureza y la higiene) para impedir que los consumidores de drogas se sirvieran de los bancos de piedra de las plazas y de los soportales durante amplios periodos del día. La iniciativa era simbólicamente reveladora de medidas de higienización social que tienen lugar en el terreno de las políticas locales de gestión de la seguridad.

todavía sorprende que la solución de la video-vigilancia haya sido planteada en Guimarães si tenemos en cuenta que los años 90 del siglo XX son por excelencia la década de expansión de este tipo de tecnologías. Forman parte de una variedad de dispositivos que, en la segunda mitad del siglo XX, irrumpen en los centros urbanos alimentando impulsos de un experimentalismo social. Lo que verdaderamente marca este experimentalismo es el deseo confesable de gobernar más a través de la técnica y menos a través de lazos personales, sustituyéndose la gobernación basada en la individualidad de los gobernantes y en la de los gobernados por la impersonalidad de dispositivos técnicos.

Lo que es pertinente analizar es la diseminación rápida y abarcadora de estos dispositivos. Éstos irrumpen en los años 70 en el espacio urbano con el estatuto de equipamientos experimentales para ayudar a solucionar los problemas del tráfico urbano. En los años 80, para asegurar la protección de individuos y bienes, estos dispositivos invaden los transportes colectivos, las zonas de comercio y de servicios y los edificios públicos. Y en los años 90 preparan una nueva etapa más polémica cuando se consuma su instalación en la vía pública (Vitalis, 1998).

Sin embargo, cuando esta solución fue presentada en Guimarães no fue aceptada pacíficamente. Como, por otra parte, tampoco lo ha sido en otros sitios. La propuesta la frenó un grupo de ciudadanos que se insurgieron públicamente contra la video-vigilancia porque ésta cuestionaba las libertades y los derechos individuales. Lo que llevó a varios ciudadanos de Guimarães a contestar la video-vigilancia tiene que ver con el hecho de que, en éste, como en otros casos, a cambio de eliminar un sentimiento de riesgo, y además exacerbado, se pueden estar creando riesgos concretos. Si bien es cierto que todos aceptamos someternos a cierto control en el espacio público porque sabemos que cierta autodisciplina es necesaria para la vida en sociedad y que ésta sólo puede estar garantizada a través de la existencia de un control exterior, el hecho de que una cámara nos grabe, muchas veces sin que lo sepamos, ¿en qué altera el grado de control que podremos estar dispuestos a aceptar? ¿Cuál es la diferencia con la situación, pacíficamente aceptada, de mostrar nuestro documento de identificación cuando se nos pide?

El rechazo de los sistemas de video-vigilancia en el espacio público ha tenido menos que ver con la duda de qué destino y qué uso se podrá dar posteriormente a las imágenes captadas, lo que, de por sí, ya es una situación que debe preocuparnos, y ha tenido mucho más que ver con dos características esenciales de las imágenes grabadas por las cámaras. Respecto

al control que se hace a través de un documento de identificación, por ejemplo, la imagen presenta dos diferencias (Vitalis, 1998). Una es que mientras que el documento de identificación registra una concreta y determinada información, la cámara de filmar registra todo lo que entra en su campo de visión. Una imagen animada, al contrario de un documento, es polisémica y puede ser objeto de una interpretación inmediata. O sea, una imagen animada suscita fácilmente reacciones primarias e interpretaciones sumarias. Por ejemplo, un robo en la calle, no existiendo imágenes del robo, se asocia inmediatamente a la presencia filmada de consumidores de droga o a individuos de una determinada etnia en una calle cercana. La otra es que, al contrario de un documento, una imagen animada no permite hacer una distinción entre la realidad representada y su representación. En una imagen animada el individuo no está representado, se presenta. En este sentido, al saber que los están grabando, los individuos tenderán a retraer sus comportamientos en el espacio público, puesto que saben de antemano que la imagen funciona como una prueba inequívoca en situaciones en que puedan ser involucrados. En Guimarães la cuestión de que con la video-vigilancia puedan llegar a ser sospechosos todos los usuarios del espacio público y de que se esté introduciendo un mecanismo inhibitor de comportamientos, motivó una amplia discusión. Los comerciantes locales siguen presionando en este momento para que se les instale un sistema de video-vigilancia. Pero la falta de legislación que encuadre la posibilidad de instalar un sistema de éstos en el espacio público para proteger bienes y personas, así como la oposición de varios ciudadanos, ha impedido que esta medida se adopte como gestión de la seguridad.

Una cuestión que tiene que plantearse se refiere a la vertiente representacional de la identidad local y del paisaje cívico. Una ciudad pequeña y tranquila, sin índices alarmantes de vandalismo, esperando que su identidad se transforme al obtener el estatuto de patrimonio de la Humanidad, pretende defender los elementos más esenciales de esa nueva identidad: sus monumentos históricos. Esta facilidad en esencializar (Mendes, 2001) revela que la percepción del cambio identitario es sentida como engendradora de riesgos. Este ímpetu de esencialización supone que fácilmente la parte se tome por el todo y que la presencia de eventuales marginales en una de las plazas centrales de la ciudad se interprete como una amenaza general posibilitadora de una reacción enérgica. Sin embargo, a pesar de que adoptar soluciones basadas en la instalación de sistemas de vídeo-vigilancia en el espacio público haya motivado, en algunos casos, una disminución de actos ilegales, o a pesar de que hayan podido ofrecer pruebas materiales de los individuos observados, la cuestión es que el problema de la falta de seguridad subsiste. La violencia, la criminalidad y la falta de seguridad

se desplazan, simplemente, hacia sitios menos expuestos a los focos mediáticos y políticos. Esta virtualidad de los dispositivos técnicos como instrumentos de gestión de la falta de seguridad y del sentimiento de inseguridad llega ahora a entenderse como un instrumento apaciguador de la conciencia política.

El mundo entre la ventana y la televisión

Cuanto más deteriorado, social y físicamente, está un espacio urbano, más aislado se encuentra, más crucial y mediática es la cuestión de la falta de seguridad, más difícil es, para quienes allí residen, intervenir en acciones colectivas, y más fácil es para la retórica política, siempre interesada en mostrarse vigilante, convertir estos sitios en escenarios de ejercicio de una representación necesaria de las medidas de seguridad (Cfr. Dubois-Maury y Chaline, 2004). El caso de la zona comercial (*Baixa*) de Coimbra parece integrarse en este modelo. También aquí el actual poder local ha entendido que la vídeo-vigilancia puede ser una solución para gestionar un sentimiento de inseguridad. También aquí se reproducen en la prensa y en los discursos políticos concepciones forzadas o exacerbadas de falta de seguridad urbana que eluden problemas reales de inseguridad. La cuestión que no puede dejar de ser planteada es la de saber quién está y de qué manera, a final de cuentas, inseguro en sitios urbanos centrales, asolados por un deterioro galopante de las condiciones de vida y de habitat, como ocurre en la zona *Baixa* de Coimbra. La pregunta planteada de esta forma ya hace prever que la seguridad que, de hecho, puede ser un problema, tiende a ser entendida, por quienes tienen condiciones de responder a esa pregunta, sin llegar al fondo de sus causas, reduciéndose frecuentemente a las percepciones estereotipadas que dominan la retórica política y la cultura de los *media*.

En el transcurso de una investigación todavía en marcha – que ya ha producido resultados preliminares –, un equipo, en el que está integrado el autor de este texto, ha realizado un estudio de *Caracterización socio-demográfica de la Baixa de Coimbra*. Este estudio forma parte de un proyecto más amplio y ambicioso, cuyo objetivo es elaborar un diagnóstico, de carácter multidisciplinar, que servirá de soporte al proceso de recuperación urbana y social que pretende efectuar el Ayuntamiento de Coimbra en esa zona de la ciudad. Este proyecto está formado por tres componentes distintos – una caracterización arquitectónica, un diagnóstico de las patologías de lo edificado y una caracterización socio-demográfica – que no sólo permitirá suministrar información detallada sobre varias

dimensiones del encuadramiento socio-urbanístico de la zona *Baixa* de Coimbra, sino también elaborar un sistema de información geográfica para la gestión urbana que apoyará el desarrollo del proceso de recuperación.⁷ Los datos aportados en que se apoyan los argumentos discutidos en esta parte del texto han sido recogidos dentro de la investigación sociológica que se integra en este vasto proyecto. En su transcurso han sido encuestados todos los fuegos habitados, 662 de ellos con cuestionarios cuantificados.

La zona *Baixa* de Coimbra es un sitio densamente construido. Se trata de un espacio de concentración de las actividades comerciales y de las funciones administrativas.⁸ Como consecuencia de esta concentración, la función residencial ha venido perdiendo importancia y el envejecimiento de la población que en ella reside es evidente. Más de un 1/4 de la población residente (27,4%) tiene 65 o más años, contra el 16,5% del conjunto de la ciudad; el 8,9% tiene 15 o menos años, contra el 13,8% de la ciudad que tiene 14 o menos años. En el periodo diurno, sobre todo en las arterias principales, este espacio urbano central es un hervidero de gente. Al caer la noche, en un contraste patente que refuerza las percepciones de falta de seguridad, la *Baixa* pierde la vida y la animación diurnas. La configuración espacial de la *Baixa*, laberíntica y opaca, las dinámicas que aquí tienen lugar y las características socio-demográficas que son específicas de ellas potencian riesgos endémicos. Uno de los más significativos, pero no por ello más mediatizado, es el riesgo de guetización de una población envejecida, inmóvil y socialmente desfavorecida. En este texto vamos a concentrarnos sobre ese riesgo.

La percepción del riesgo de inseguridad revela que, entre diversos factores, la cuestión de la seguridad es una de las principales preocupaciones de los residentes en la *Baixa* de Coimbra. Entre 7 factores analizados, sólo los accesos automovilísticos a la *Baixa* fueron más negativamente evaluadas (54,4% de evaluaciones negativas) que la seguridad (el 50,9% de las evaluaciones son negativas), apareciendo después la limpieza de las calles (con un 40,6% de evaluaciones negativas de los residentes). Un análisis de la percepción de la falta de seguridad por grupos de edades (Gráfico 1) revela que la amenaza de la inseguridad es igualmente sentida en todos los niveles de edad, no habiendo grandes diferencias entre aquéllos que

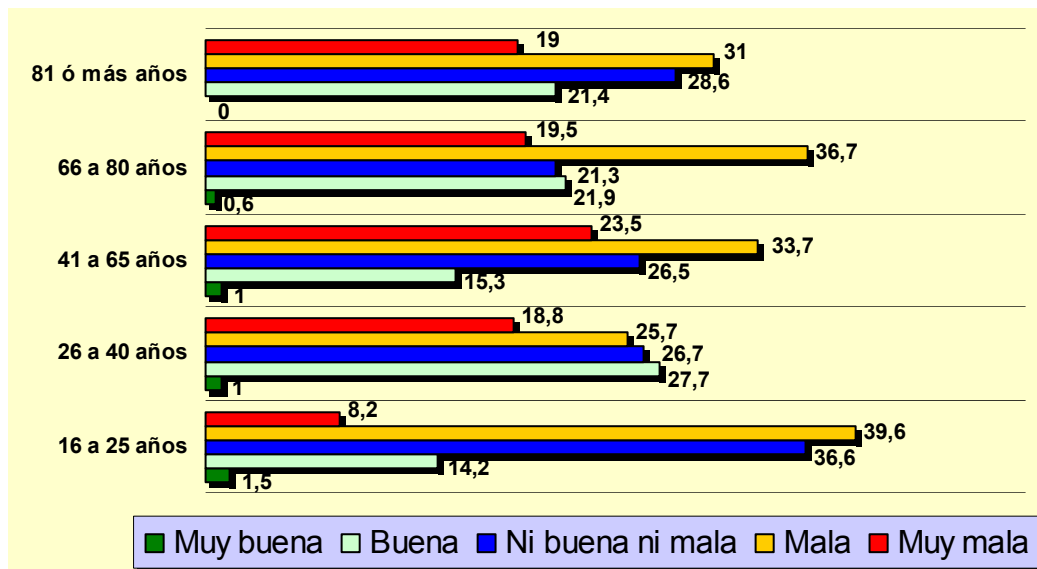
⁷ El estudio tiene como eje el área parroquial de San Bartolomé y parte de la de Santa Cruz, zona que, de acuerdo con los cálculos iniciales, está formado por un universo de unas 842 familias residentes (1.979 individuos), 1280 fuegos (481 de los cuales, vacíos) y 721 edificios. El Instituto de Investigación Interdisciplinar de la Universidad de Coimbra es la entidad responsable de la ejecución del proyecto en el que trabajan unos 75 investigadores de 4 áreas disciplinares.

⁸ De un total de 761 edificios total o parcialmente ocupados, sólo 66 son exclusivamente residenciales, mientras que 247 son exclusivamente no residenciales, 123 son principalmente no residenciales, 190 son principalmente residenciales y 108 son residenciales y no residenciales en igual proporción.

menos evaluaciones negativas hacen de la situación actual de la seguridad (los que tienen entre 26 y 40 años, con un 44,5% de evaluaciones negativas) y aquéllos que más evaluaciones negativas hacen (los que tienen entre 41 y 65 años, con un 57,2% que evalúa negativamente la situación actual de la falta de seguridad). Este dato parece confirmar ya una tendencia que lleva a concluir que el sentimiento de la falta de seguridad es socialmente tanto más transversal – no restringiéndose a grupos de edades, sexuales o étnicos, por ejemplo – cuanto más mediatizada y exacerbada por los discursos periodísticos y políticos está la cuestión de la falta de seguridad (Cfr. Body-Gendrot y Le Guennec, 1998; Ansidei *et al.*, 1998).

Gráfico 1

Percepción de la seguridad en la *Baixa* de Coimbra por grupos de edades (%)

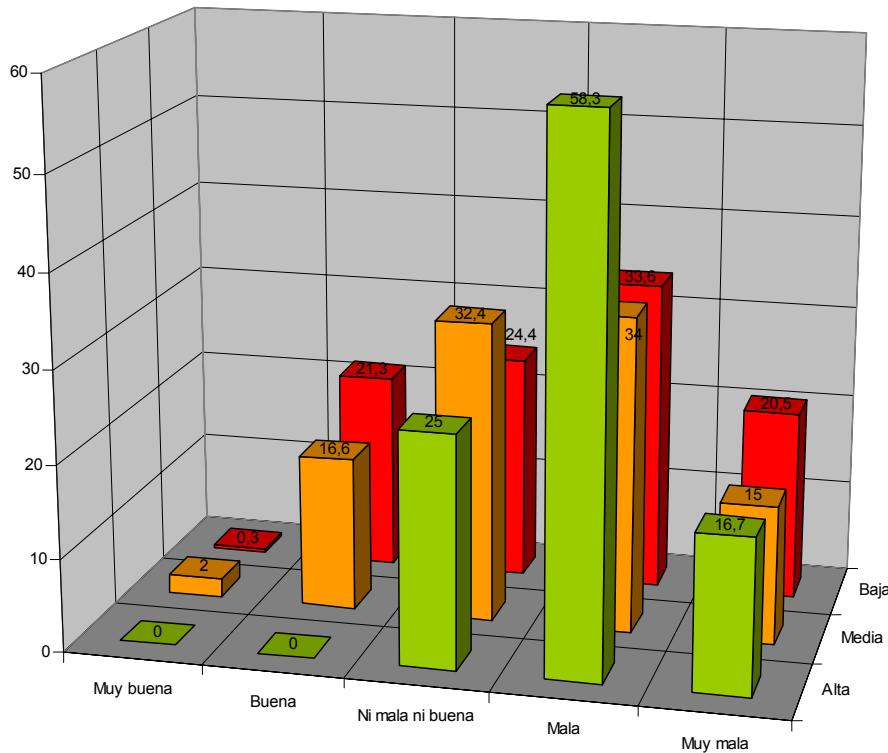


La movilidad en el espacio urbano es recurrentemente entendida, ya como una variable independiente de la percepción de la falta de seguridad, ya como una variable dependiente. Saber hasta qué punto los individuos se mueven menos en el espacio por temor a pasar por situaciones de inseguridad, o en qué medida la percepción de la inseguridad es el resultado de condicionantes sociales y físicas a la movilidad, es una cuestión que no puede dejar de ser evaluada a partir de un efecto de contexto. Y cuando el sentimiento de la falta de seguridad se hace más importante y visible que las propias condiciones de seguridad (en sus múltiples dimensiones), saber si la percepción de la falta de seguridad es una causa o un efecto de las condiciones de movilidad se convierte en una cuestión retórica. En el caso de

la *Baixa* de Coimbra lo que ocurre es que cuanto más elevada tiende a ser la movilidad más negativamente se evalúa la situación de la seguridad en la *Baixa* de la ciudad (Gráfico 2).⁹

Gráfico 2

Percepción de la seguridad en la *Baixa* de Coimbra por individuos con diferentes grados de movilidad en el espacio urbano (%)



La casa y el espacio doméstico son entendidos, incluso estando supuestamente ubicados en un sitio inseguro, como un reducto tranquilo e incólume. El acto de salir de casa se siente como peligroso. La población de más edad, sobre todo la de sexo femenino, en una mezcla de opción resignada y de imposibilidad física – dado que las casas donde viven no están adaptadas a la movilidad –, se limita a mirar el mundo a partir de la ventana de casa o de la pantalla de la televisión.¹⁰ La inseguridad, que es una consecuencia de vivir en casas viejas e

⁹ A partir de una cuestión que, a través de una escala con cinco niveles, medía los movimientos de los individuos residentes en la *Baixa* de Coimbra a cinco sitios diferentes de la ciudad relativamente céntricos, se ha construido un índice de movilidad. Este índice ha revelado una escasa inclinación para la movilidad, con sólo un 2% de los individuos que revelan una movilidad elevada, un 39% una movilidad media y un 59% una movilidad baja. La relación lugar de residencia-lugar de trabajo, con un 55% de los encuestados profesionalmente activos y con empleos en la *Baixa* y un 59% que se dirigen a pie hacia su lugar de trabajo, no es ajena a este reducido grado de movilidad.

¹⁰ Es significativo que un 71% de los encuestados que viven solos sean mujeres y que un 69% de los que viven solos tengan 65 o más años.

insalubres, está frecuentemente enredada en los discursos que moldean y avivan los sentimientos de falta de seguridad. Pero para esta población, cuya edad la ha encerrado en sus propias casas y cuyas casas le anticiparon los efectos limitadores de la edad, la inseguridad, como consecuencia de su mediatización, no puede dejar de ser vista como una coartada que sirve de base a un discurso racionalizador para la situación de guetización en que esa misma población se encuentra. La falta de seguridad se presenta aquí como el otro lado de la moneda de cierto fatalismo.

¿Las ciudades están en crisis?

La idea de que las ciudades estén en crisis parece haberse convertido en un lugar común. La concentración de la población en las ciudades, el crimen y la violencia, la degradación paisajística y ambiental, la decadencia de las infraestructuras, el declinio de la economía industrial, el aumento del paro, el tráfico y el aparcamiento, la falta de viviendas y la marginalidad, son factores recurrentemente señalados como síntomas de la crisis de las ciudades. Ésta parece resumir todos los miedos de una civilización definitivamente urbana en la que las líneas que definen su futuro son cada vez más inciertas. Asfixiadas por el crecimiento o víctimas de un declinio inevitable y agonizante, no parece que las ciudades consigan librarse de los discursos negativistas que se producen sobre ellas (Ascher, 1998). Ante las presiones de los procesos económicos dominantes y ante los discursos negativos sobre las ciudades, la retórica política de los gobernantes locales tiende a reproducir la situación contradictoria en que se encuentran las ciudades. Estos discursos se mueven entre una exacerbación del sentimiento de crisis y de inseguridad y la necesidad de desarrollar estrategias sustentables de combate al declinio, entendiendo el ambiente y el paisaje físico y social como un patrimonio y un recurso no renovable.

Se diría, por otra parte, que vivimos en el tiempo de las ciudades y que éstas asumen hoy un protagonismo creciente como agentes políticos, económicos y culturales (Le Galès, 2003). Las condiciones que moldean la crisis que la ciudad supuestamente atraviesa y los procesos que pretenden evitarla o dominarla, ya sean de iniciativa pública, privada o mixta, ya sean iniciativa de la sociedad civil que actúa en el sector no mercantil, nos llevan a ver las ciudades como si se tratase de agentes sociales. El creciente carácter estratégico y, en algunos casos, voluntarista de estos procesos, erigidos y mantenidos en nombre de la ciudad, es lo que refuerza la idea que las ciudades se entienden ahora como agentes sociales que, además de

poseer una identidad, son también capaces de dirigirla y transformarla. La misma mediatización de las ciudades tiene que ver con el hecho de que éstas hayan venido gradualmente a personificar un conjunto de dinámicas importantes y, si la ciudad está en crisis, es porque ha asumido un sitio tan central en la civilización moderna que las crisis de la sociedad se ven como crisis de la ciudad (Peixoto, 2000).

En el juego de la presentación mediática en que se mueven las ciudades, la radicalización de la diferencia (Fortuna, 1999), necesaria para crear un sentido de identidad única, lleva a que las ciudades se estén concentrando más en políticas de tratamiento del espacio que en el paisaje cívico que las rodea. La cuestión, como afirma Donzelot (2003), es que no se puede querer hacer ciudad sin hacer sociedad. Éste parece ser ahora el gran equívoco de las políticas urbanas que conceden más atención a los lugares y que no dan más importancia a la confianza que se le debe dar a las instituciones que la que se le debe dar a las personas. Los casos que, con este texto, hemos retratado procuran realzar dimensiones del estado de sitio en que el paisaje cívico se encuentra en el contexto de las políticas y de la retórica urbana dominantes. Perdidas en una retórica política y mediática avasalladora y en la profusión de soluciones plásticas que pretenden actuar sobre el espacio urbano, las cuestiones importantes de la seguridad del paisaje cívico de las ciudades son frecuentemente instrumentalizadas, trivializadas o eludidas.

Los tres casos que hemos abordado en este texto permiten obtener algunas conclusiones sobre la anatomía de la falta de seguridad urbana en ciudades portuguesas de dimensión media. En primer lugar, y desde luego, la comprobación de la proliferación de discursos, sobre todo políticos y mediáticos, sobre la inseguridad ciudadana. El hecho de que se hable cada vez más de seguridad que de inseguridad parece ser revelador de ese aprovechamiento político y mediático que se hace de esta sensible materia. O sea, es la seguridad como valor inalienable de las clases medias urbanas lo que origina los excesos de retórica política y mediática, en vez de los índices y las situaciones de inseguridad. A falta de terribles índices de inseguridad se hace necesario exacerbar y reinventar la seguridad. Por eso, en las tres ciudades analizadas, la idealización y la romantización del pasado es la fórmula común para exacerbar el valor de la seguridad en el presente. La exigencia de seguridad, personificada en las reclamaciones de los comerciantes de Guimarães, es una reivindicación de orden y una tentativa de imposición de una actitud gubernativa frente a los grupos sociales que las clases medias creen que son peligrosos. En particular, el caso de Oporto y el de Guimarães nos permiten concluir que por

detrás de los discursos y de las medidas de refuerzo de seguridad se esconden evidentes ideologías de higienización del espacio público. El análisis de estas dos ciudades del norte de Portugal nos permite igualmente concluir que el valor estratégico de los discursos sobre la seguridad reside esencialmente en el experimentalismo técnico y social que permiten y legitiman. Este experimentalismo, en los diversos modos en que se realiza, es un facilitador de coartadas para una acción política que pretende eludir las causas de la falta de seguridad y, con ello, la ineficacia y las limitaciones de la gobernación de las ciudades. El caso de Coimbra revela también hasta qué punto se enfoca la seguridad sin tener en cuenta las causas.

Pero muestra igualmente que cuando el sentimiento de inseguridad es generalizado porque los discursos políticos y mediáticos lo inculcan, este tiende a ser transversal a toda la población, independientemente de sus características sociales, mientras que las situaciones reales de falta de seguridad tienden a afectar a grupos de características sociales específicas. En el caso de Coimbra, son en especial las mujeres de edad avanzada las que están expuestas a situaciones de inseguridad. Lo que es irónico, y muy revelador de la anatomía de la inseguridad, es que estas mujeres se sientan amenazadas por un sentimiento de falta de seguridad urbana que, en la práctica, no las pone ante situaciones de inseguridad, y que, al mismo tiempo, sientan totalmente seguras en el reducto de su hogar, cuando es aquí donde se producen las situaciones de inseguridad que constituyen la mayor amenaza. Específicamente, por el hecho de que esas casas en donde viven, y que representan como fortalezas que las protejan de peligros presentidos, amenacen ruina y estén expuestas a riesgo inminente de incendio.

Referencias bibliográficas

- Alves, Virgínia (2003a), «Menos moedinhas para os arrumadores», *Jornal de Notícias*, 18-1-2003, p. 5.
- Alves, Virgínia (2003b), «Moedas continuam a sair dos bolsos», *Jornal de Notícias*, 28-1-2003, p. 6.
- Ansidei, Michèle *et al.* (1998), *Les risques urbains: acteurs, systèmes de prévention*. Paris: Anthropos.
- Ascher, François (1998), *Metapolis: acerca do futuro da cidade*, trad. Álvaro Domingos. Oeiras: Celta Editora.
- Body-Gendrot, Sophie (2001), *Les villes. La fin de la violence?*. Paris: Presses de Sciences PO.
- Body-Gendrot, Sophie y Nicole Le Guennec (1998), *Mission sur les violences urbaines*. Paris: La Documentation Française.
- Câmara Municipal do Porto (2004), «CM Porto». Sitio web consultado en el 12 de febrero de 2004. Disponible en http://www.cm-porto.pt/pageGen.asp?SYS_PAGE_ID=455902&ID=921
- Costa, João Paulo (2003), «Câmara quer acabar com os arrumadores», *Jornal de Notícias*, 22-2-2003, p. 34.
- Donzelot, Jacques (2003), *Faire société. La politique de la ville aux États-Unis et en France*. Paris: Seuil.
- Dubois-Maury, Jocelyne y Claude Chaline (2004), *Les risques urbains*. Paris: Armand Colin.
- Forte, Joaquim (2003), «Populares exigem drogados “limpos”. Concelhia do PP defende tratamento compulsivo dos toxicodependentes», *Jornal de Notícias*, 28-2-2003, p. 45.
- Fortuna, Carlos (1999), *Identidades, percursos, paisagens culturais: estudos sociológicos de cultura urbana*. Lisboa: Celta.
- Foucault, Michel (1977), *Vigiar e punir: nascimento da prisão*, trad. Lígia M. Ponde Vassalo. Petrópolis: Vozes.
- Le Galès, Patrick (2003), *Le retour des villes européennes. Sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement et gouvernance*. Paris: Presses de Sciences PO.
- Luz, Carla Sofia (2003), «Ex-arrumadores vão tapar buracos», *Jornal de Notícias*, 23-1-2003, p. 6.
- Luz, Carla Sofia *et al.* (2003), «Paulo Morais não vê arrumadores no Porto», *Jornal de Notícias*, 15-2-2003, p. 7.
- Meireles, Adelino y Helena Norte (2004), «Câmara continuará a pedir apoio da PSP. Mudanças na PM relançam polémica sobre detenções», *Jornal de Notícias*, 13-8-2004, p. 27.
- Mendes, José Manuel (2001), «O desafio das identidades», en Boaventura de Sousa Santos Edtr., *Globalização. Fatalidade ou Utopia?*. Porto: Afrontamento, p. 489-523.

- Mota, José y Helena Norte (2004), «Detenção de arrumadores para identificação é ilegal», *Jornal de Notícias*, 13-8-2004, p 26.
- Norte, Helena (2002), «Aprender a arrumar a vida», *Jornal de Notícias*, 15-12-2002, p. 6-7.
- Norte, Helena (2003), «Polémica na Polícia Municipal», *Jornal de Notícias*, 16-10-2001, p. 28.
- Pais, José Machado (2001), *Ganchos, tachos e biscates: jovens, trabalho e futuro*. Porto: Âmbar.
- Peixoto, Paulo (2000), «Gestão estratégica das imagens das cidades: análise de mensagens promocionais e de estratégias de *marketing* urbano», *Revista Crítica de Ciências Sociais* 56, p. 99-122.
- Silva, Hugo (2002), «Uma noite de gala pelos arrumadores», *Jornal de Notícias*, 11-11-2003, p. 36.
- Silva, Hugo (2003a), «Luta contra Máfias», *Jornal de Notícias*, 23-2-2003, p. 10.
- Silva, Hugo (2003b), «Reaberta polémica sobre o Porto Feliz», *Jornal de Notícias*, 23-7-2003, p. 40.
- Silva, Nuno (2003a), «Vila do Conde. Colónia da polémica», *Jornal de Notícias*, 2-3-2003, p. 18.
- Silva, Nuno (2003b), «Vidas», *Jornal de Notícias*, 7-11-2003, p. 29.
- Vitalis, André (1998), «De la relation de discipline aux technologies de contrôle» en Michèle Ansidei *et al.* Edtr., *Les risques urbains. Acteurs, systèmes de prévention*. Paris: Anthropos, p. 173-183.